

PACHA: DEFENDIENDO LA TIERRA

Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina y Caribe



Grisul
Grupo de Relações Internacionais e Sul Global

DESARROLLO Y MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE

Desde la colonización, América Latina y Caribe se integró internacionalmente en condiciones desiguales y de forma dependiente en relación a los países desarrollados. Como periferia, la función de la región era producir y exportar las materias primas necesarias para el desarrollo de los países ricos. Durante la consolidación de los estados nacionales, este modelo de producción primario exportador se fortaleció y, a pesar de las transformaciones, la región continua siendo una de las principales exportadoras de materias primas del mundo. En este proceso es fundamental comprender el papel del extractivismo, entendido como una forma de acumulación y explotación de los recursos naturales que no tiene en cuenta ni sus límites ni la sostenibilidad de sus prácticas.

Hoy, América Latina y Caribe es la región del mundo con más defensoras/es de la tierra y ambientalistas asesinadas/os. Según Global Witness, de las/os 197 ambientalistas asesinadas/os en el mundo en 2017, 116 lo fueron en la región. Estas/os activistas y líderes sociales fueron asesinadas/os por denunciar y enfrentarse a gobiernos y empresas que se apropiaron de sus tierras y contaminaron el medio ambiente. Brasil, Colombia, México y Perú son los países más afectados, pero en todos los demás estados se registran también diversas formas de violencia que tratan de silenciar a las personas que levantan la voz para denunciar y actúan en legítima defensa de sus tierras. Estas enfrentan diversas formas de criminalización de la protesta, tales como amenazas, violencia física y sexual y procesos legales agresivos. El 60% de los asesinatos se relacionan con la agroindustria y el extractivismo vinculado a actividades de minería.

La violencia y los asesinatos de las/os líderes sociales y defensoras/es del medio ambiente en América Latina y Caribe es resultado de las disputas por la tierra y los recursos y, en términos más generales, por el modelo de desarrollo. De acuerdo con la FAO, la región tiene la distribución de la tierra más desigual de todo el planeta. Más de la mitad de las tierras productivas están concentradas en el 1% de las propiedades de mayor extensión, y el 10% más rico de la población regional posee el 71% de su riqueza y patrimonio. La tierra en manos de pequeños propietarios, familias y mujeres disminuye cada año, y muchos recursos naturales están en áreas indígenas y quilombolas amenazadas por la invasión de tierras por parte de gobiernos o empresas transnacionales.

En este escenario de disputas, ¿por qué visibilizar los conflictos, los actores involucrados y la creación de alternativas al modelo de desarrollo extractivista? En lugar de considerar los pueblos como “objetos” de desarrollo o sus “víctimas”, queremos destacar la agencia de los colectivos e individuos en legítima defensa de la tierra y sus formas tradicionales de vida. Consideramos como actores en conflicto, por un lado, a los actores públicos y privados – generalmente socios en proyectos público-privados de desarrollo – y, por otro, a los actores sociales que suelen ser criminalizados en la defensa de sus territorios y recursos. Entendemos las luchas y resistencias de los actores sociales como parte de un movimiento más amplio de carácter global denominado Ecologismo de los Pobres o Movimiento de Justicia Ambiental, como defiende Joan Martínez Alier. Creemos también que

las acciones de protesta y oposición por parte de las comunidades afectadas por el extractivismo no son apenas reacciones, sino cuestionamientos del actual modelo de desarrollo de matriz extractivista y occidental. Este modelo pone la economía en primer lugar, y promueve la modernización y el crecimiento económico sin considerar los costos o efectos negativos. En contraste, el Ecologismo de los Pobres critica las raíces coloniales, etnocéntricas y patriarcales de este modelo, promoviendo alternativas.

En América Latina y Caribe son los movimientos sociales y las comunidades de afectados, las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes, los que formulan las alternativas al modelo de desarrollo hegemónico. Sin embargo, el poder en la región es ejercido desde las zonas centrales y urbanas sobre los territorios rurales, y siguen siendo las élites blancas y mestizas las que dominan y controlan los recursos. Estas élites gobiernan, discriminan y explotan a todos los habitantes, sobre todo a las poblaciones rurales y campesinas, constituidas por indígenas y afrodescendientes. Las luchas y resistencias de estos pueblos son, por lo tanto, despreciadas y no se consideran centrales. De forma semejante, las mujeres, a pesar de que son protagonistas en las luchas y procesos de resistencia, también son invisibilizadas y consideradas con frecuencia meras víctimas.

En las próximas páginas ilustramos los impactos negativos del modelo de desarrollo extractivista, analizando especialmente las actividades de minería a partir de los casos registrados en el portal Environmental Justice Atlas (EjAtlas). A pesar de que el portal registra conflictos desde la segunda mitad del siglo XX, no especificaremos una fecha exacta de los conflictos, teniendo en vista el carácter histórico y estructural de muchos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas facetas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los mapas incluyen conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy. En la elaboración de la cartilla, nos centramos en 259 casos, y estudiamos en profundidad 10 ejemplos que nos parecen ilustrativos por cada tema analizado. De esta manera, visibilizamos los impactos del extractivismo sobre el medio ambiente, las luchas y resistencias de las mujeres, indígenas y afrodescendientes, así como las acciones de empresas transnacionales como la Vale. Mostramos también algunos ejemplos de criminalización de los movimientos y analizamos alternativas formuladas a partir de las cosmovisiones de los pueblos de América Latina y Caribe. Rescatando las propuestas de defensa de la tierra y Buen Vivir de los pueblos andinos, decidimos rendir homenaje a sus luchas, escogiendo para la cartilla el término Pacha, palabra quechua que significa naturaleza, tierra, mundo y universo y que ha inspirado las luchas en defensa de nuestra madre tierra, la Pacha Mama.

MÁS INFORMACIÓN:

Environmental Justice Atlas – EJATLAS (<http://ejatlas.org/>)

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (<http://www.fao.org/home/es/>)

Global Witness (<https://www.globalwitness.org/en/blog/new-data-reveals-197-land-and-environmental-defenders-murdered-2017/>)

CONFLICTOS POR MINERÍA Y EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA Y CARIBE



Labrundo, 2018

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas (<https://ejatlas.org/featured/mining-latam>), 2018.

MÁS INFORMACIÓN:

Extractivismo: es un modelo de apropiación de los recursos naturales que incluye sectores diversos como la minería, la explotación de petróleo y la agricultura. La apropiación de estos recursos se da mediante prácticas intensivas y con el objetivo de exportar materias primas a los mercados globales. En este modelo, no se calculan los límites de los recursos ni las consecuencias que los procesos extractivos provocan sobre la vida de las personas y los territorios afectados.

Justicia Ambiental: principio y movimiento global constituido por las luchas de los actores sociales que sufren las consecuencias del actual modelo de desarrollo capitalista, basado en el crecimiento económico y en la depredación de los recursos naturales. En este proceso, se defiende la distribución equitativa de los costos del desarrollo, la autodeterminación y la soberanía popular y, a partir de otros saberes y cosmovisiones, se proponen modelos alternativos. El libro de Joan Martínez Alier, *El Ecologismo de los Pobres*, es una referencia en este campo.

Buen Vivir: también denominado Sumak Kawsay, es una formulación alternativa al desarrollo que deriva de las cosmovisiones de los pueblos indígenas de la región andina. Al contrario de la definición clásica de desarrollo que prioriza la economía, este enfoque de bienestar constituye una reacción a la materialización de la vida y de las personas e incluye nociones como la felicidad, los derechos de la naturaleza, la solidaridad y la cooperación entre individuos y colectivos.

IMPACTOS DEL EXTRACTIVISMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

La séptima es hacia abajo: con la tierra que pisas, de donde vendrá tu sustento.

Si provocas la tempestad o la sequía, si el suelo se seca o tiembla, no habrá paz completa.

Los Siete Tipos de Paz – Filosofía Aymara.

¿Por qué el medio ambiente?

Las actividades derivadas del extractivismo – sea mediante la minería, la explotación de petróleo o el monocultivo de productos primarios como la soya y la caña de azúcar –, al no considerar las técnicas y los límites de los recursos naturales, tienen profundos impactos sobre el medio ambiente. Estos impactos son especialmente visibles cuando ocurren “accidentes ambientales”, como la ruptura de las represas de Mariana en Minas Gerais, pero son constantes y contribuyen a aumentar problemas como la continua emisión de gas carbónico y el calentamiento global. Al contaminar el agua, el aire y la tierra, la destrucción ecológica que estos proyectos promueven es elevada y, en algunos casos, total. Como demuestran los 10 ejemplos representados en el mapa, los efectos cambian entre un proyecto y otro, pero generalmente provocan pérdida de la biodiversidad, contaminación del ambiente y de recursos vitales y fuga de sustancias tóxicas con graves consecuencias sobre la salud de las comunidades afectadas. Estos efectos son contrarios a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a una calidad de vida adecuada para su salud. Los efectos del extractivismo sobre el medio ambiente, con mayor o menor intensidad, se registran en todos los países de América Latina y Caribe y afectan especialmente a las mujeres y a las poblaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Para profundizar este fenómeno, presentaremos un caso emblemático registrado en uno de los países más afectados de la región: Perú.

El caso de la mina Santa Ana de la empresa Bear Creek en Perú

Localizada en la región de Puno, en el sur de Perú y cerca de la frontera con Bolivia, se encuentra la mina a cielo abierto Santa Ana. El proyecto de explotación de la región rica en plata fue promovido por la empresa canadiense Bear Creek en 2004, quién años después obtuvo los derechos de concesión para explotarla, programando el inicio de sus actividades en 2012.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), realizado en 2011, arrojó resultados preocupantes por la posibilidad de contaminación de los ríos y lagos existentes en las cercanías de la región – como los ríos Callacami, Desaguadero y, especialmente, el lago Titicaca, considerado el mayor de América Latina en volumen de agua-. Este estudio constató también que la concesión minera, además de violar lo previsto por el artículo 71 de la Constitución peruana, que prohíbe la explotación de minas en locales fronterizos, también invadiría el área de reserva de Aymara-Lupaca, lo que podría provocar daños ambientales y socioculturales irreparables,

ya que dicha área, existente desde 1996, fue creada justamente con el objetivo de preservar la diversidad biológica, cultural y paisajística de la región.

En este contexto se realizaron conferencias para la población involucrada y directamente afectada por el emprendimiento, en las que la Bear Creek defendió los beneficios que la actividad de minería traería a la región. Es destacable que la Bear Creek también intentó deslegitimar los resultados del EIA, alegando que se trataba de un informe técnico, poco claro y elaborado únicamente en inglés.

No convencidos por los argumentos de la empresa, líderes de la comunidad Aymara se movilizaron y organizaron una serie de protestas y manifestaciones contrarias a la explotación de la mina de Santa Ana en 2011. Tales eventos, protagonizados por miembros de la comunidad afectada con el fin de impedir la continuidad del proyecto de explotación de la citada mina de plata, se denominaron “Aymarazo”. Los de mayor impacto se registraron entre mayo y junio del mismo año, cuando se realizaron marchas en la región de Puno, bloqueos de carreteras –entre ellas la Desaguadero, que conecta Perú a Bolivia –, así como ataques contra policías y ocupación de sus puestos. Al final de esos enfrentamientos se registraron treinta heridos y seis muertes, además de millones de dólares en daños materiales.

En el caso presentado, es evidente que el proyecto de explotación de la mina no respetó la integridad de las poblaciones y de los ecosistemas locales. La gran movilización protagonizada por los Aymara alcanzó el resultado esperado: en junio de 2011, el entonces presidente peruano Alan García revocó la concesión y prohibió la explotación de la mina de Santa Ana. Con todo, dieciocho líderes de la comunidad Aymara fueron acusados criminalmente por obstrucción de los servicios públicos, perturbación de la paz y extorsión agravada. A pesar de que el promotor responsable por el caso retiró las acusaciones contra ocho de ellos por falta de pruebas y, después del juicio, otros nueve fueron absueltos, el 6 de julio de 2017, el líder y defensor de los derechos humanos Walter Aduviri Calizaya fue condenado a siete años de prisión y al pago de una multa de más de 300 millones de dólares. No obstante, aún cabe recurso de la decisión y la organización no gubernamental Front Line Defenders está movilizando una fuerte campaña a favor de su absolución. El mencionado conflicto puede considerarse exitoso, ya que las intensas movilizaciones lograron impedir la continuidad de las actividades de la empresa Bear Creek.

MÁS INFORMACIÓN:

Base de datos de pueblos indígenas – Aymara (<http://bdpi.cultura.gob.pe/pueblo/aimara>)

Front Line Defenders – Aymara Community leaders on trail (<https://www.frontlinedefenders.org/en/case/aymara-community-leaders-trial>)

Aymarazo – <http://rpp.pe/noticias/aymarazo>

Constitución de Perú de 1993 – <http://www4.congreso.gob.pe/ntley/imagenes/Constitu/Cons1993.pdf>

IMPACTOS DEL EXTRACTIVISMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Conflictos por extractivismo con impacto ambiental por local*

Extracción de minerales en el río Luisa Tolima - Colombia

La extracción de minerales en el río Luisa, por parte de diversas empresas, ha generado importantes conflictos ambientales. La principal denuncia es por la contaminación del río, que amenaza la existencia de agua para consumo humano y para las actividades agrícolas, y que comienza a tener incidencia en la salud de la población local.

Amenazas al Cerro San Pedro San Luis Potosí - México

La explotación de la mina de oro y plata en San Luis de Potosí, por parte de la empresa New Gold, está poniendo en riesgo la existencia del Cerro de San Pedro, considerado sagrado por las comunidades locales, y generó la oposición del Frente Amplio Opositor por los impactos en el agua, el medio ambiente y la salud de la población.

La resistencia de la comunidad de Casa Pueblo Adjuntas, Utuado y Hogares Jayuya - Puerto Rico

La resistencia de Casa Pueblo contra las operaciones de minería fortaleció la participación de la población local y la sensibilidad con la conservación de los recursos naturales. En 2002, recibió el Premio Internacional Goldman al Ambiente por los 35 años de autogestión comunitaria defendiendo el agua, los bosques y las personas.

Contaminación por plomo en Santo Amaro Santo Amaro, Bahía - Brasil

La explotación de plomo en la región por la Compañía Brasileña de Plomo afectó a la atmósfera, ríos y suelo, así como a la salud, la fauna y el turismo. Asociaciones de afectados exigen una reparación por la contaminación por metales pesados y su impacto en las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales locales.

Proyecto Mirador de minería en la Cordillera del Cóndor El Pangui, Zamora-Chinchipec - Ecuador

El proyecto de explotación de cobre de la empresa china ECSA, localizado en un área de alta diversidad biológica y extrema fragilidad ambiental de la Amazonía, habitada por comunidades indígenas Shuar, fue objeto de protestas y resistencias de organizaciones sociales, unidas en la Marcha Nacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, organizada por la *Confederación Nacional de Comunidades Indígenas del Ecuador*.

Lucha contra la minería Lisandro Proaño por contaminación San Mateo de Huancho, Lima - Perú

Margarita Pérez Anchirayco es una importante figura de esta lucha en defensa de los derechos de la comunidad, por los graves efectos del proyecto en la salud de la población, principalmente en niños y mujeres. La ausencia de respuesta en la justicia nacional llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que paralizó las actividades.

La transnacional Newmont contamina el Río Desaguadero La Joya, Oruro - Bolivia

Newmont, una de las principales empresas mineras de oro del mundo, terminó el proyecto después de 15 años por las constantes denuncias de las comunidades ribereñas por la contaminación del río con metales pesados. Además del cierre de la mina, los afectados exigen compensaciones económicas por daño ambiental y por el uso de sus tierras.

Efectos ambientales de las Minas Pascua Lama Huasco - Chile

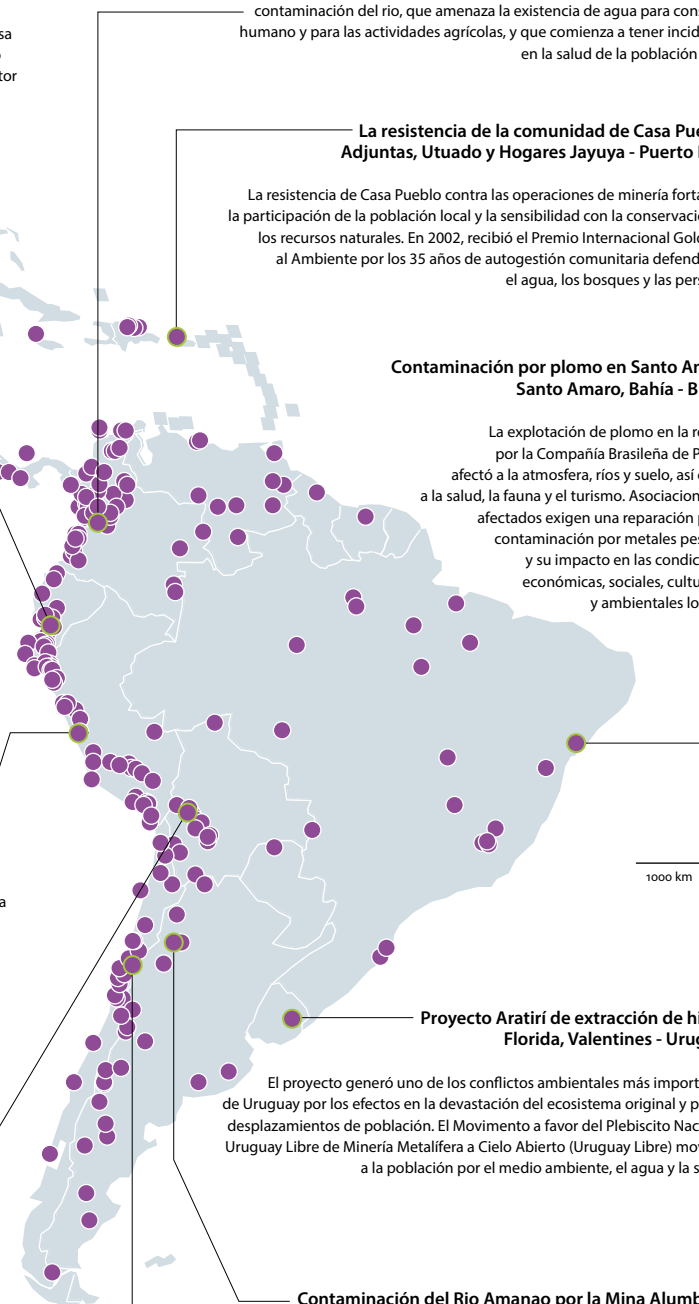
El proyecto argentino-chileno de extracción de oro, plata y cobre generó fuerte oposición de los residentes locales y asociaciones ambientalistas, preocupados con los efectos de la minería en el ecosistema. Las movilizaciones provocaron la paralización de las operaciones de la mina por las graves irregularidades ambientales de la empresa.

Proyecto Aratirí de extracción de hierro Florida, Valentines - Uruguay

El proyecto generó uno de los conflictos ambientales más importantes de Uruguay por los efectos en la devastación del ecosistema original y por los desplazamientos de población. El Movimiento a favor del Plebiscito Nacional Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto (Uruguay Libre) movilizó a la población por el medio ambiente, el agua y la salud.

Contaminación del Río Amanao por la Mina Alumbra Belén, Catamarca - Argentina

La empresa multinacional Minera Alumbra, que explota uno de los diez mayores emprendimientos de cobre del mundo, ha sido denunciada por diversas organizaciones ambientalistas e investigada por posibles fugas que están contaminando el río Amanao, con residuos químicos que dañan los cultivos de los pueblos ribereños.



*No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en cuenta el carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

EXTRACTIVISMO Y DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

Hoy llegamos aquí para solicitar el cierre de Pascua Lama. (...) Nosotros estamos aquí para decirles de nuevo que no necesitamos de su dinero para desarrollarnos y que no estamos esperando compensaciones porque no hay compensaciones para la muerte de nuestra Madre. Nosotros apenas les pedimos que abandonen nuestras tierras y nos permitan continuar viviendo en paz.

Declaración de la Comunidad Indígena y Agraria de los Diaguita Huascoaltinos (Protest Barrick).

¿Por qué los desplazamientos forzados?

Las actividades de minería, como parte del extractivismo en América Latina y Caribe, además de renovar y reproducir las relaciones de dependencia, provocan consecuencias negativas en diferentes ámbitos, ya que representan un impacto directo en la realidad socioeconómica, en la salud y en el espacio ambiental de las comunidades afectadas. Con la contaminación de los recursos naturales, las comunidades de afectados/as son privadas de las condiciones mínimas de subsistencia y, muchas veces, como en el caso de indígenas y afrodescendientes de quilombos o palenques, son expulsadas de sus territorios tradicionales, en clara violación de sus derechos de propiedad colectiva reconocidos por instrumentos internacionales. La salida forzada de las comunidades afectadas también es resultado de factores como la ocupación ilegal o la compra de tierras a gran escala, los desalojos, la limitación de las libertades y la criminalización de las protestas, así como diversas formas de amenaza, persecución, violencia psicológica y física, y asesinatos. La importancia de los desplazamientos forzados reside en el hecho de que estos no suponen apenas una reubicación, sino que implican la destrucción de prácticas y epistemologías tradicionales, eliminando, por tanto, diversos modos de ver e interpretar el mundo. A partir de los diez casos representados en el mapa, es evidente que muchos procesos de desplazamiento forzado son producidos por proyectos extractivistas en todos los países de América Latina y Caribe. Para profundizar este fenómeno, presentamos un caso emblemático con efectos binacionales en Argentina y Chile.

El proyecto binacional Pascua Lama de la empresa Barrick Gold

El proyecto Pascua Lama de la empresa multinacional canadiense Barrick Gold, operante a través de la filial Minera Nevada, buscaba la explotación de oro, plata y cobre concentrados en la región del valle de los Andes, a una altitud de 4.500 m, una de las más minas altas del mundo. La mina es un proyecto binacional, puesto que la explotación está localizada a ambos lados de la frontera de Chile y Argentina. Los dos países firmaron un acuerdo en 2007 para facilitar la actividad extractivista en la región. Desde el inicio, el proyecto ha sido acusado de cometer diversas violaciones de derechos humanos contra las comunidades indígenas, contaminaciones ambientales y desplazamientos forzados. Uno de los primeros problemas presentes en los proyectos iniciales fue la propuesta de reubicar glaciares que estaban en el local de explotación. La reubicación sería realizada a través del uso de

explosivos para quebrar el hielo. Esto provocó grandes cuestionamientos de agencias ambientales, de organizaciones no gubernamentales y de campesinos locales que dependen de los glaciares para la circulación del agua en la región. Para resolver el problema, la empresa Barrick Gold rediseñó el espacio de explotación dejando los glaciares fuera del foso de la minería, alegando que así no serían afectados por la explotación. Pero, en 2009, autoridades del gobierno chileno identificaron “impactos imprevistos” que, gracias a las presiones de activistas y campesinos locales, generaron una multa de 16 millones de dólares para la empresa.

La comunidad indígena de la región mantuvo una fuerte resistencia desde el inicio de la implementación del proyecto. La Comunidad Indígena y Agraria de los Diaguita Huascoaltinos apeló a las instancias nacionales e internacionales, considerando que el proyecto produjo la contaminación y la reducción del ciclo del agua para la agricultura y provocó la destrucción de formas de subsistencia y de vida de las comunidades, forzándolas a salir de la región. Las comunidades también sufrieron con la apropiación de tierras por parte de la empresa, que desplazó familias forzosamente para la implementación del proyecto. En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denominó el proceso de desplazamiento como “negación de justicia” cometida por el gobierno chileno contra los grupos indígenas. Frente a estas alegaciones y al aumento de los costos con sanciones y multas, la Barrick Gold suspendió el proyecto en 2013. No obstante, las luchas permitieron el avance de la agenda contra la minería en la región. En Argentina fue aprobada una ley para la protección de glaciares, imponiendo límites a la minería y la prohibición de la minería en las regiones de glaciares. En Chile, la Barrick Gold todavía intenta salvar el proyecto, pero encuentra fuerte resistencia por parte de la Corte Suprema de Justicia que no está convencida de la viabilidad ambiental del mismo.

En este caso, así como en ejemplos semejantes en Uruguay, Brasil y México, es necesario destacar la resistencia de las comunidades indígenas que, junto con organizaciones ambientales, permitió la suspensión de la mina y la sensibilización de los gobiernos chileno y argentino y de la comunidad internacional sobre los impactos ambientales y los desplazamientos forzados en la región. Además, los grupos contrarios al proyecto actuaron conjuntamente en los dos espacios nacionales, desarrollando redes de acción colectiva. Con todo, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia chilena haya simpatizado con las causas ambientales, suspendiendo las iniciativas de firmar un nuevo permiso de explotación de la región, el proyecto todavía puede ser reabierto en el país.

MÁS INFORMACIÓN:

Documental El Oro de Pascua Lama – (<https://www.youtube.com/watch?v=MzsNxAT2tTc>)

Página sobre conflictos con la Barrick Gold – (<http://protestbarrick.net/section.php?id=3.html>)

CIDH – Comisión Interamericana de Derechos Humanos – (<http://www.oas.org/es/cidh/>)

EXTRACTIVISMO Y DESPLAZAMIENTOS FORZADOS

*Conflictos por extractivismo que provocaron desplazamientos de población, por local**



*No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en cuenta el carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas, 2018.

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LAS MUJERES

Vivíamos bien en este lugar, hasta que llegó la desgracia con la inauguración de la vía del tren y las empresas (...) Muchas veces lavamos ropa y después tenemos que lavarla de nuevo porque se llena de muchas partículas negras que llegan por el paso del tren y del humo que sale de las fábricas.

Francisca Souza, habitante de Piquiá de Baixo.

¿Por qué las mujeres?

Debido a factores como la militarización de los territorios, la contaminación de los recursos naturales y la desarticulación de las economías locales, el extractivismo afecta a las vidas, los cuerpos y los territorios de las mujeres. Los proyectos extractivistas están también asociados al aumento de fenómenos como la prostitución, las violaciones, los problemas de salud, la restricción de la libertad y los desplazamientos forzados. Reforzando la cultura patriarcal existente en América Latina y Caribe, el extractivismo contribuye también para consolidar papeles tradicionales de género y el modelo de masculinidad hegemónica. Ante este fenómeno, la movilización, resistencia y lucha de las mujeres es permanente. Ellas están en primera línea en la lucha por la tierra y la defensa de los recursos naturales y son protagonistas de innumerables movilizaciones, como muestran los conflictos representados en el mapa. Su papel es fundamental como líderes en las protestas y ocupaciones, pero también en la protección y el mantenimiento de la vida. Sin embargo, se enfrentan a la invisibilización de su papel y a la marginación social. Contra ellas se practican también formas de criminalización específicas y, con frecuencia, son excluidas de la propiedad de la tierra y de las negociaciones o toma de decisiones que afectan directamente a sus vidas. Para analizar este fenómeno, seleccionamos un caso emblemático brasileño.

El complejo siderúrgico en Piquiá de Baixo y sus efectos

En la región de Piquiá de Baixo, a finales de la década de 1980, se instalaron cinco empresas siderúrgicas: Viena Siderúrgica S.A, Gusa Nordeste S.A, Hierro Gusa do Maranhão (Fergumar), Cia. Siderúrgica Vale do Pindaré y Siderúrgica do Maranhão S.A (Simasa). Además, todo el mineral de hierro extraído de las minas de Carajás, explotadas por la Vale, pasa por Piquiá. El complejo siderúrgico, esencial para el funcionamiento de la producción extractiva, sumado a la autopista necesaria para el transporte y salida del material, ha generado graves impactos en la vida de las mujeres que desde hace generaciones viven en la región. La situación de las habitantes de Piquiá y los efectos en la salud y en la calidad de vida son tan alarmantes que ya fueron objeto de denuncia del Estado brasileño en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A estos emprendimientos se sumó una central de producción de cemento, agravando todavía más la situación de la contaminación del aire en el barrio. Los vehículos de estas empresas, responsables por el transporte de productos como carbón, mineral de hierro o hierro líquido, circulan libremente por la autopista que corta Piquiá, exponiendo a

las habitantes de todas las edades a riesgos de accidentes o de derramamiento del metal líquido. La contaminación del agua del río que atraviesa la comunidad, causada por las actividades industriales, ha afectado también negativamente al turismo de esta localidad.

Los altos hornos lanzan gases contaminantes en la atmósfera y, junto con el humo y el constante polvo causado por los camiones de las empresas que circulan en la autopista, generan diversos problemas de salud para todos los habitantes, principalmente para los niños, que también son responsables de las mujeres, por ser quienes, en una sociedad machista, se ocupan de las tareas de cuidado de la familia. Además, las empresas llegaron imponiendo sus valores, sin diálogo y sin consulta a las habitantes. Los relatos de violencia física al cuerpo de las mujeres también han sido diversos.

En este conflicto se encuentran, por un lado, comunidades en situación de pobreza y desigualdad que se enfrentan a la falta de políticas públicas de habitación, salud y saneamiento básico y, por otro, empresas con fuerte poder económico. Además, tales impactos constituyen graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, puesto que la industria contaminadora encuentra en el Estado un ente que favorece su acción y no fiscaliza ni regula debidamente sus actividades extractivas e industriales.

La salida encontrada por las mujeres, apoyadas por la Fio-cruz y por el Instituto PACS, fue la de hacer su propio monitoreo de las aguas y del aire de Piquiá de Baixo, para que los datos fuesen contrastados con los de las empresas, al tiempo que intercambiaron y compartieron experiencias con otras organizaciones. Así, más instrumentos fueron incorporados a la lucha, que también incluye la demanda de reasentamiento de las familias hacia un área sin contaminación directa.

Cuando las mujeres actúan en la movilización política y participan de la toma de decisiones, redefinen su posición social y desafían las estructuras de dominación. “Una cosa que aprendimos es que en otras zonas de Brasil y de América Latina también hay barrios en situaciones parecidas a la nuestra. Lugares contaminados por grandes empresas que perjudican la salud de la población y del medio ambiente”, explica Joelma Alves, de la Asociación de Habitantes de Piquiá de Baixo.

MÁS INFORMACIÓN:

PACS – Do Maranhão ao Rio de Janeiro: populações resistem aos impactos da mineração (<https://www.youtube.com/watch?v=8Ppx4ij5-FI>)

PACS – Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul (<http://www.pacs.org.br>)

PACS; Rede Justiça nos Trilhos; Fundação Oswaldo Cruz (2017) – Vigilância Popular em Saúde e Ambiente em áreas próximas dos complexos siderúrgicos. Relatório final (<http://www.pacs.org.br/files/2017/09/Relat%C3%B3rio-Final-Final.pdf>)

Documental “Otras voces por la tierra”: <https://www.youtube.com/watch?v=HzjNFaiHjP8>

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LAS MUJERES

Conflictos por extractivismo con protagonismo de las mujeres, por local*

Proyecto minero El Tambor San José del Golfo e San Pedro Ayampuc - Guatemala

La resistencia de las mujeres mestizas y Maya Kaqchikel de las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, junto con el frente de Resistencia "La Puya" y la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales, logró parar el proyecto de minería El Tambor de la empresa estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA).

Movilización contra la mina de la canadiense Pacific Rim San Isidro, Cabañas - El Salvador

La Mesa Nacional contra la minería metálica logró parar el proyecto de explotación de oro de la empresa canadiense Pacific Rim Corporation. La movilización social, con protagonismo de las mujeres, hizo de El Salvador el primer país que prohibió la minería metálica por los impactos ambientales y humanos.

Mujeres en defensa del Vale de Siria El Porvenir, Francisco Morazan - Honduras

El Movimiento Madre Tierra y el Comité Ambiental de Valle de Siria, entre otros, denunciaron los graves problemas de contaminación y salud provocados por el proyecto San Martín de extracción de oro por las empresas canadienses Glamis Gold y Gold Corp Inc.

Defensa ambiental contra la minería Tâmesis Tâmesis, Antioquia - Colombia

El Comité por la Defensa Ambiental del Territorio propone un "Cinturón Ambiental Occidental" contra los proyectos de extracción de oro de las empresas Sociedad Minera Solvista (Colombia) y AngloGold Ashanti (Sudáfrica). Las mujeres se organizaron en el Circuito Económico Solidario de Tâmesis.

Violación de derechos por la empresa Almaden Minerals Iztacamaxtitlán, Puebla - México

La Unión de Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida, Atcolhua, con gran participación de las mujeres, denuncia la violación de derechos por el proyecto Ixtaca, de explotación de oro y plata por la empresa canadiense Almaden Minerals.

Marcha contra la Minería de Intag Cotacachi, Imbabura - Ecuador

Varias organizaciones, entre ellas la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas del Ecuador, se rebelaron contra los proyectos de minería próximos a la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, región de gran biodiversidad. Participan en la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos contra la megaminería en Ecuador.

Contaminación de la Glencore en la mina de cobre Tintaya Espinar Cuzco - Perú

Las comunidades, con gran participación de las mujeres, denuncian las violaciones de derechos humanos y la contaminación ambiental por el proyecto de extracción de cobre de la minera suiza Glencore International AG.

Renamat contra el Proyecto minero Achachucani Challapata Challapata, Oruro - Bolivia

La lucha de las comunidades, con fuerte peso de las mujeres, y en especial de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, consiguió parar el proyecto de minería de oro Achachucani, reivindicando el carácter agrícola y pecuario de la región.

Mujeres contra el proyecto Aratirí de extracción de hierro Valentines, Florida - Uruguay

El conflicto generado por el proyecto Aratirí de extracción de hierro por las empresas Zamin Hierrous (EUA) y Aratirí (Uruguay) impulsó la creación del Movimiento por el Plebiscito Nacional Uruguayo Libre de Megaminería Metalífera a Cielo Abierto. Las mujeres mostraron los impactos específicos que sufren en el proyecto audiovisual "Otras voces por la tierra".

Mujeres contra la contaminación del Rio Huanuni Dalcene, Oruro - Bolivia

La Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra denuncia la violencia ambiental que sufren las comunidades por los impactos de la Corporación Minera de Bolivia, que también ponen a riesgo la vida del río Huanuni.



* No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en cuenta el carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

“La Madre Tierra es una persona viva, no podemos entender ese tipo de actividad y nos oponemos a eso, muchos animales de nuestra región han desaparecido, la vida es la tierra, ella mantiene la vida, la vida es agua y sol; para nosotros el petróleo es un problema. Nos trae mucha violencia, con las compañías petroleras vienen también los grupos armados”

Representante del movimiento de resistencia en Motilón Bari

¿Por qué los pueblos indígenas?

El extractivismo está estrechamente vinculado al colonialismo interno que caracteriza a los países de América Latina y Caribe, es decir, la continuidad aún existente entre la dominación colonial y la situación actual de los países de la región. Así, los proyectos extractivistas afectan sobre todo a las poblaciones rurales y grupos específicos como los indígenas. Una de cada tres hectáreas de territorio concedido en la región para la minería, explotación petrolífera, agroindustrial o forestal pertenece a los pueblos indígenas.

La marginalización de los pueblos indígenas es histórica e implica su exclusión social, económica, política y cultural, así como la subordinación de sus saberes y cosmovisiones. A pesar del reconocimiento formal de los derechos de estos pueblos y de la ratificación de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la demarcación y ocupación de tierras ancestrales por parte de estas comunidades es lenta y, en algunos casos, registra retrocesos. En este contexto, la ampliación de la frontera extractivista, sin consentimiento ni consulta previa, provoca cada vez más conflictos, pero la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas por la defensa de sus territorios y de los recursos naturales son permanentes. Para ilustrar los efectos sobre este colectivo, analizaremos el caso de uno de los países más afectados por el extractivismo: Colombia.

La minería y otras actividades extractivas en los territorios del pueblo Motilón Bari

El pueblo Motilón Bari vive en Colombia, y su territorio es habitado desde hace generaciones por los pueblos de Bari, compuestos por cerca de 23 comunidades indígenas. Ese territorio es un área rica en biodiversidad y caracterizada por la presencia de minerales, madera, petróleo y recursos hídricos, lo que provocó que sea objeto de intereses corporativistas internacionales. En la década de 1990, compañías de petróleo, como la COLPET (Colombian Petroleum Company) y SAGOC (South American Gulf Oil Company), y más recientemente la Ecopetrol, entraron en la región. Es fundamental resaltar también la actuación del Estado colombiano como facilitador y colaborador en la entrada y permanencia de esas empresas, logrando una verdadera cooperación de fuerzas para las grandes extracciones en la región: en 2014 fueron emitidas siete concesiones para explotación de minas de carbón en el área. Se cree que serán extraídos cerca de 270 millones de barriles de petróleo bruto.

En las negociaciones de este conflicto intervinieron a favor de estas comunidades actores gubernamentales como la Autoridad Nacional de los Gobiernos Indígenas. Sin embargo, otros órganos, como el Ministerio de Desarrollo, consideraban que la explotación de los recursos generaría beneficios para el país. Debido al desplazamiento causado, ACNUR también participó de este caso. Además del desplazamiento, del aumento de violencia y del crimen, de la pérdida de recursos de subsistencia y de la violación de derechos humanos, había miedo por el potencial aumento de la corrupción, así como por la clara falta de seguridad en el trabajo, por dimisiones, desempleo y otros problemas sociales. En lucha, los grupos movilizados eran principalmente trabajadores informales del área, movimientos sociales a favor de los indígenas, hacendados, mujeres y comunidades próximas que se conmovieron y se sumaron a la resistencia contra las empresas de extracción.

La perforación de petróleo y la excavación de carbón no son las únicas amenazas para los pueblos indígenas de Bari; su salud y cultivos también soportan hace décadas las consecuencias de la fumigación aérea realizada por el Gobierno nacional. Otros riesgos son las carreteras que se infiltran en su territorio, la presencia de traficantes de drogas o las actividades de minería de oro. La llegada, en 1999, de los grupos paramilitares rebeldes “Bloque Catatumbo Bloque Norte” generó un aumento de la violencia y la militarización del área por el gobierno. El conflicto entre las partes fue intenso, presentando no solo movilización de masas, sino también un alto nivel de violencia en una acción preventiva de resistencia a las acciones de las organizaciones allí presentes. Una plataforma de voz para este grupo fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, al cual los Motilón Bari recurrieron en 2008. Gracias a las protestas y movilizaciones que resistieron contra los visibles y potenciales impactos al medio ambiente y al énfasis dado al caso, el proyecto de la Ecopetrol se detuvo.

En 2006, la Corte Constitucional de Colombia, después de que el caso fuese llevado al ámbito internacional, falló a favor de las comunidades indígenas, forzando a las empresas relacionadas a suspender la explotación de petróleo y carbón en el territorio. Con todo, en 2014 fueron emitidas siete concesiones para explotación de minas de carbón en el área. Aunque existen registros más recientes, tras esta decisión de la Corte, los caminos para mejorar la situación son las alteraciones institucionales, decisiones judiciales, una nueva legislación y el fortalecimiento de la participación de estos pueblos. Los Motilón Bari necesitan continuar resistiendo.

MÁS INFORMACIÓN:

Asociación Pueblo Indígena Bari (<http://www.asocbari.org>)

Cultura Motilón Bari (<https://www.youtube.com/watch?v=RSeLkYIt-PI>)

Vulneración de los Derechos Humanos del pueblo Motilón Bari: <https://www.colectivodeabogados.org/?Vulneracion-de-los-Derechos>

Tribunal Permanente de los Pueblos (<http://permanentpeopletribunal.org/?lang=es>)

ACNUR – Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (<http://www.acnur.org/>)

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Conflictos por extractivismo con impacto en territorios indígenas, por local*

Comunidades contra el proyecto Tulgitic de la canadiense Almaden Minerals Iztacamaxitlán, Puebla - México

Comunidades indígenas contrarias al proyecto de explotación de oro y plata, en un área de fuerte presencia indígena, exigieron la consulta previa de las poblaciones y crearon la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Vida, del Agua y del Territorio, denunciando al Estado mexicano y a las concesiones por la violación de sus derechos comunitarios.

Protestas contra Marlin, proyecto de la canadiense Gold Corp San Marcos - Guatemala

Comunidades indígenas y campesinas rechazan el proyecto por los impactos ambientales sobre el territorio, el agua y la salud de los habitantes, oponiéndose a la minería en las 58 consultas comunitarias realizadas. A pesar de las muertes de líderes indígenas y activistas, la gran resistencia inspiró otros frentes de oposición a la minería en el país.

Indígenas yukpa luchan contra la expansión de la explotación de carbón Provincia Zulia - Venezuela

Los intentos de expandir proyectos de explotación de carbón en la Sierra de Perijá contradicen la ley de los pueblos indígenas y la demarcación de tierras indígenas. El impulso del extractivismo generó una fuerte resistencia por parte de los indígenas yukpa, sin que sus demandas por tierras y el respeto de sus derechos hayan sido atendidas.

Comunidades indígenas contra la minería ilegal en tierras sagradas Santander de Quilichao, Cauca - Colombia

Comunidades indígenas se enfrentan a mineros ilegales que explotan oro en territorios tradicionales y, principalmente, en la localidad sagrada del Parque Natural Cerro de Munchique. A pesar de las movilizaciones, la explotación ilegal continúa, provocando problemas ambientales y de salud, pérdida de cultura y territorio, desplazamientos y homicidios.

Comunidades yanomami de la cuenca del río Ocamo afectadas por minería ilegal Alto Orinoco, Amazonas - Venezuela

Desde 2009 existen denuncias de explotación ilegal de oro en la región de Alto Ocamo, con cerca de 1.000 explotadores de oro trabajando ilegalmente en tierras Yanomami, a pesar de la presión y movilización de la comunidad Yanomami y de otros grupos sociales. El escenario ha provocado asesinatos y masacres del pueblo Yanomami.

Protestas contra el proyecto de minería Curipamba Sur Las Navas, Bolívar - Ecuador

Campesinos, mujeres e indígenas se movilizaron contra la explotación de oro y metales, expulsando a los mineros por no realizar estudios de impacto ambiental ni consultas a las comunidades locales. La aprobación oficial del proyecto generó protestas, con fuerte represión policial, que se unieron a la Marcha Nacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos.

Indígenas contra el proyecto de minería de oro Fruta del Norte Zamora-Chinchipec - Ecuador

El proyecto de la empresa Kinross enfrentó una activa oposición de las comunidades tradicionales. El prefecto indígena de la provincia declaró su territorio "pulmón de la tierra" para evitar el avance del extractivismo, uniéndose a la Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos. Kinross informó que detendría el proyecto, pero la empresa china Junefield parece tener interés en la región.

Conflicto entre indígenas y minería en Cinta Larga Rondônia y Mato Grosso - Brasil

Las disputas por la explotación de diamantes en tierras tradicionales existen desde 1960. Las comunidades indígenas continúan resistiendo a las iniciativas estatales para regularizar la explotación. A pesar de la creación de una reserva para preservar la comunidad, las fronteras de sus tierras han sido constantemente reducidas, sus exigencias no han sido atendidas y grupos de mineros todavía invaden la región.

Minería en Yaigojé-Apaporis vulnera los derechos de los pueblos indígenas Taraira, Vaupés - Colombia

La empresa Cosigo y mineros ilegales explotan oro en la región desde 2007, inclusive en la Sierra de La Libertad, en el interior de las tierras colectivas Yaigojé-Apaporis, local sagrada para las comunidades indígenas, vulnerando los derechos de los pueblos indígenas y la sostenibilidad del corredor biológico de la región.

Comunidad indígena Tres Islas contra la minería ilegal Tambopata, Madre de Dios - Perú

80% de las tierras de la comunidad nativa Tres Islas de los pueblos Shipibo y Ese'Eja están cubiertas por 137 concesiones de minería. Cansados de la invasión de sus tierras, los grupos indígenas organizaron la resistencia a las invasiones. Las empresas denunciaron penalmente a la comunidad, pero el Tribunal Constitucional decidió a su favor.



* No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en cuenta el carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LOS AFRODESCENDIENTES

Los integrantes del pueblo Saramaka mantienen una fuerte relación espiritual con el territorio ancestral que han usado y ocuparon tradicionalmente. La tierra significa más que una mera fuente de subsistencia para ellos; también es una fuente necesaria para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los miembros del pueblo Saramaka. Las tierras y los recursos del pueblo Saramaka forman parte de su esencia social, ancestral y espiritual. En este territorio, el pueblo Saramaka caza, pesca y cosecha, y recoge agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. Los sitios sagrados están distribuidos en todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un valor sagrado para ellos. En especial, la identidad de los integrantes del pueblo con la tierra está intrínsecamente relacionada con la lucha histórica por la libertad en contra de la esclavitud, llamada la sagrada "primera vez".

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
2007.

¿Por qué los afrodescendientes?

A pesar de la ausencia de registro, las poblaciones afrodescendientes son uno de los grupos más afectados por el extractivismo y la invisibilización de sus luchas. Al racismo y la exclusión social, económica, política y cultural que sufren en América Latina y Caribe, se suman la expansión del monocultivo, los proyectos de minería promovidos por el estado y las empresas multinacionales, así como la explotación de otros recursos naturales en sus territorios. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, que también reconoce los derechos de los afrodescendientes, fue ratificado por la mayoría de los estados de la región, pero la demarcación de tierras colectivas para estas poblaciones avanza lentamente y con diversas dificultades. En este sentido, la discriminación a la que se enfrentan es múltiple y las consecuencias del extractivismo incluyen la pérdida de sus modos tradicionales de vida, la expulsión y el desplazamiento forzado de sus tierras, impactos negativos sobre la salud y el bienestar, el aumento de la violencia y la criminalización de sus protestas en defensa de la tierra y de los recursos naturales. Como ejemplo de estos fenómenos, presentamos el caso del pueblo Saramaka en Surinam.

Las violaciones de los derechos del pueblo Saramaka por parte del Estado de Surinam

Los miembros del pueblo Saramaka (Saramacca o Samaka), también conocidos como maroons – término derivado de cimarrón, utilizado en la colonización española de las Antillas para denominar a los africanos que escapaban de la esclavitud para refugiarse en las regiones más inaccesibles de las islas y formar comunidades autónomas, también denominadas quilombos o palenques-, son descendientes de africanos originarios de diferentes regiones y pueblos, que fueron traídos para América en la condición de esclavos para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar. Escaparon de la esclavitud para refugiarse en espacios independientes del poder colonial y formaron sus propias comunidades, en Surinam y en Guyana Francesa, localizadas en medio de la Floresta Amazónica y resguardadas por

un tratado de paz firmado con los colonizadores holandeses en 1762. Así, los Saramaka recrearon las organizaciones sociales de pueblos africanos de los que son descendientes y constituyeron una sociedad original, con normas, política, religión y lengua propias.

Desde la década de 1960, los pueblos Saramaka fueron amenazados por la construcción de presas y por empresas multinacionales de explotación maderera y minera, que extraían recursos con la aprobación del Estado de Surinam. En octubre de 2000, la Asociación de las Autoridades de Saramaka, el Forest Peoples Programme y David Padilla, expresidente de Bolivia, pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que declarase culpable al Estado de Surinam por violar los derechos del pueblo Saramaka, por los continuos efectos negativos asociados a la construcción de la represa hidroeléctrica de Afobaka en 1960, y las concesiones que afectaron y aún afectan el cotidiano de los pueblos Saramaka. En mayo de 2007, la audiencia fue celebrada en la CIDH. La victoria fue para el pueblo Saramaka, ya que el Tribunal concluyó que el Estado violó el derecho a la propiedad, a la personalidad jurídica y a la protección judicial. Incluso después de esa victoria para el pueblo Saramaka y para la justicia ambiental, el Estado de Surinam no tomó las medidas necesarias para poner en práctica las recomendaciones del Tribunal. Al contrario, el gobierno continuó con actividades que comprometen la supervivencia del pueblo Saramaka, como concesiones mineras y explotaciones de madera.

En América Latina y Caribe, la historia de los afrodescendientes está marcada por luchas y resistencias que atraviesan generaciones. Al respecto, el proceso de judicialización internacional de las disputas de comunidades tradicionales, como la del pueblo Saramaka, se ha vuelto el camino más común para que los derechos de autodeterminación y las tradiciones de estos pueblos sean respetados, y para que no sean usados como moneda de cambio en las negociaciones entre los estados y las grandes multinacionales. El caso del pueblo Saramaka nos muestra que el “desarrollo” en América Latina es un proceso que viene muchas veces acompañado de la militarización y de la pérdida de derechos de los pueblos más tradicionales. La resistencia aguerida del pueblo Saramaka y de los diversos pueblos en toda América Latina contra los grandes proyectos de explotación es tal vez la única alternativa posible para parar el avance neoliberal y proponer alternativas al desarrollo vigente.

MÁS INFORMACIÓN:

Asociación de las Autoridades de Saramaka – Forest Peoples Programme: <https://www.forestpeoples.org/partner/association-saamaka-traditional-authorities-vsg>

REBELO, M. (2011): “O povo Saramaka versus Suriname: Uma análise sob o olhar de Glifford Geertz”. *Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais*, 14, v. 1, pp.95-118 (<http://revistas.unibrasil.com.br/cadernos-direito/index.php/direito/article/view/605/569>)

CIDH – Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka Vs. Suriname, 2007 (http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf)

Quilombos Latinoamericanos – Agencia de Información Frei Tito para América Latina (ADITAL) (http://etnoterritorios.org/apc-aa-files/92335f7b3cf47708a7c984a309402be7/quilombos_latinoamericanos.pdf)

LUCHAS Y RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS AFRODESCENDIENTES

*Conflictos por extractivismo con impacto en comunidades afrodescendientes, por local**



** El Environmental Justice Atlas incluye datos sobre impactos en pueblos indígenas y grupos racialmente discriminados, pero no evidencia los impactos sobre afrodescendientes salvo casos específicos. Por lo tanto, en el mapa no aparecen todos los conflictos que afectan a las comunidades afrodescendientes, sino casos específicos.

* No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en cuenta el carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

Fuente: Elaboración propia con base en el Environmental Justice Atlas, 2018.

EXTRACTIVISMO Y EMPRESAS MULTINACIONALES: EL CASO DE LA VALE

Después de un año de la tragedia, la Articulación Internacional de los Afectados y Afectadas por la Vale S.A. reafirma que el desastre de la Samarco/Vale/BHP no puede ser entendido como un caso aislado y sí como una tragedia más del sector de la minería. A lo largo de los años, hemos denunciado muchas tragedias provocadas por la minería de la Vale S.A. sobre la vida de personas, comunidades tradicionales, quilombolas, indígenas, campesinas y poblaciones urbanas empobrecidas. Articulación Internacional de los Afectados y las Afectadas por la Vale, 2016.

¿Por qué la Vale?

Las empresas multinacionales, principales promotoras del extractivismo, desarrollan megaproyectos que privilegian sus intereses económicos en detrimento de los de las personas y de los territorios afectados. En este proceso, las principales protagonistas son las empresas del Norte Global, pero existe una participación creciente de las multinacionales de los países emergentes, sobre todo asiáticas y latinoamericanas. A pesar de ser originarias del Sur o con capital prevalente de esta latitud, los efectos nocivos de estas empresas son elevados y semejantes a los de multinacionales del Norte, contra las que las organizaciones ambientales y la sociedad civil generalmente han protestado. Las luchas y resistencias de los/las afectados/as por las empresas multinacionales del Norte y del Sur movilizan cada vez más redes de activismo transnacional.

Debido a la importancia creciente de la expansión de las empresas brasileñas en América Latina y Caribe queremos visibilizar el papel de la Vale, una de las principales empresas de minería del mundo, con actividades también en el sector logístico y de energía eléctrica. La Vale fue fundada en 1942 por el Presidente Getúlio Vargas y posteriormente privatizada. Hoy tiene sede en Brasil y es una empresa de capital abierto, con acciones negociadas en la bolsa de valores. Está presente en cerca de 30 países alrededor del mundo y, de acuerdo con el Environmental Justice Atlas, 18 de los 23 conflictos en los que la empresa está involucrada tienen lugar en América Latina, especialmente en Brasil, pero también en Colombia, Perú y Chile. Como muestran los 10 casos representados en el mapa, los efectos negativos de la actuación de esta empresa son visibles en diversos países, pero por la importancia, simbolismo y actualidad del caso, profundizaremos la historia de la ruptura de la represa de Mariana y sus consecuencias.

El caso de la ruptura de la represa de Samarco en Mariana

En noviembre de 2015 tuvo lugar la ruptura de la represa de Resíduos de Fundão, situada en el Complejo Industrial de Germano, en la ciudad de Mariana, en Minas Gerais. La construcción se localizaba en la Cuenca del Río Gualaxo do Norte, afluente del río do Carmo, que a su vez, es un afluente del río Doce. Ese desastre tuvo como principales consecuencias la contaminación de más de 300 km del río Doce.

Generó también la liberación de 60 millones de metros cúbicos de lodo de residuos que provocaron la muerte de 19 personas, destruyeron pueblos y dejaron a más de mil habitantes de la región desabrigados y sin agua, además de haber causado la muerte de diversas especies de animales.

La represa pertenecía a la empresa minera Samarco Minería S.A., controlada por la compañía Vale S.A. y por la BHP Billiton Brasil Ltda. Según el laudo de la Policía Civil de Minas Gerais, la ruptura ocurrió debido a la licuefacción de los residuos arenosos que sostenían las elevaciones de la represa. Además, un informe del Ministerio Público del Trabajo y de la Seguridad Social afirma que elementos de la estructura, del funcionamiento y de la manutención de la represa, como fallas en el drenaje, erosiones, fugas, grietas, etc., también fueron responsables por el rompimiento.

El Ministerio Público presentó una denuncia contra Samarco, Vale, BHP Billiton y otras 23 personas, alegando responsabilidad por crímenes ambientales y penales. Posteriormente, activó una acción civil pública requiriendo la reparación integral de los daños sociales, económicos y ambientales causados por la ruptura.

El desastre de Mariana también activó la participación de movimientos sociales y sindicales. Una importante organización involucrada fue la Articulación Internacional de los Afectados y las Afectadas por la Vale, que tiene por objetivo “fortalecer y ampliar la articulación de las comunidades y organizaciones, a nivel nacional e internacional, frente a las violaciones de derechos humanos de la empresa Vale S.A. y de otras industrias del sector de la minería”.

El desastre de Mariana, así como otros casos en América Latina y Caribe, provocó evidentes impactos negativos para la población, incluyendo la muerte de varias personas. A pesar de ello, en este caso es posible vislumbrar aspectos positivos, como la articulación de diversos actores en formaciones como el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) que está luchando continuamente para defender los intereses no solo del medio ambiente, sino de toda la población afectada por acciones de grandes compañías, además de una actuación institucional que no se muestra ajena a estos problemas.

MÁS INFORMACIÓN:

Articulación Internacional de Afectados y Afectadas por la Vale (<https://atingidospelavale.wordpress.com/quem-somos/>)

Documentales sobre el desastre en Mariana – Olhar Mariana (<http://redeminas.tv/olhar-mariana/>)

Tragedia en Mariana (<https://www.youtube.com/watch?v=DvprawvqQs>)

Comité de Especialistas para el Análisis de la Ruptura de la Represa de Resíduos de Fundão – Informe sobre las Causas Inmediatas de la Ruptura de la Represa de Fundão (<http://fundaoinvestigacion.com/wp-content/uploads/general/PR/pt/FinalReport.pdf>)

Ministerio Público Federal. Denuncia – apresentada perante a seção judiciária do Estado de Minas Gerais (<http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/docs/denuncia-samarco>)

CONFLICTOS PROVOCADOS POR LA ACTUACIÓN DE LA VALE S.A.

Conflictos por proyectos extractivistas de la Vale, por local*

Conflictos por extracción de fosfato Bayóvar, Sechura - Perú

El proyecto de extracción de fosfatos ha generado conflictos por tres motivos principales: las escasas ventajas regionales, los impactos en el litoral (principalmente en la pesca y producción de mariscos) y la posible presencia y explotación de uranio, que tendría gran impacto ambiental en la región, en la salud de la población y en las actividades agropecuarias.

Malas prácticas del proyecto La Morada Jesús Pedro Galvez y Cachachi, Cajamarca - Perú

El proyecto presentó desde el inicio un conjunto de malas prácticas que generaron un creciente descontento de las comunidades, provocando un conflicto con la Vale, quién formó grupos de seguridad acusados de atacar a dirigentes comunitarios y sus familias. La empresa ha sido sancionada por diversos organismos nacionales e internacionales.

Minería, deforestación y comunidades indígenas Corumbá, Mato Grosso do Sul - Brasil

Las empresas extractivas, como la Vale, que actúan en la tercera mayor reserva de minería de hierro del país, son abastecidas con carbón derivado de maderas nativas de la región, en algunos casos por medio de deforestación ilegal de las tierras indígenas Kadiwéu. Prácticas delictivas han sido denunciadas por los pueblos indígenas y por organizaciones ambientales, generando una amplia movilización local y nacional.

Impactos del proyecto de minería de Tres Valles en las comunidades locales Salamanca y Illapel, Coquimbo - Chile

El proyecto de la Vale, con consentimiento del gobierno, incluye la explotación de dos minas y ocurrió sin el conocimiento de las comunidades locales. Estas viven de pequeñas actividades económicas de fruticultura y pastaje, y se ven afectadas por la pérdida de tierras y por la contaminación de los principales afluentes de agua.

Proyecto de extracción de Potasio en el Río Colorado Malargue, Mendoza - Argentina

El proyecto de extracción de potasio de la Vale en el Río Colorado, una de las cuencas más importantes de Argentina, fue presentado como una de las mayores inversiones extranjeras en el país. Sin embargo, el riesgo de salinización del río, el enorme consumo de gas y, principalmente, la ausencia de acuerdo sobre las facilidades tributarias para la empresa y los beneficios para la región terminaron llevando a la suspensión del proyecto, dejando desempleadas a 3.500 personas que trabajaban en la construcción de la mina.

Impactos ambientales y sociales de la extracción de carbón El Paso y La Jagua de Ibirico, Cesar - Colombia

El conflicto entre las comunidades de la región y las empresas que extraen carbón (entre ellas la Vale) en una de las mayores minas del mundo, ha generado importantes consecuencias ambientales y sociales, sin que las poblaciones locales se vean beneficiadas por los resultados de esa explotación en términos de desarrollo humano.

Comunidades quilombolas contra la mina de bauxita Oriximiná, Pará - Brasil

35 comunidades quilombolas luchan contra la explotación maderera y contra las compañías de minería, entre ellas la Vale, para defender la integridad de sus territorios. Las actividades de esas compañías son responsables por la deforestación y por la migración forzada de centenas de familias quilombolas.

Impactos del transporte de caolín en tierras indígenas Moju, Pará - Brasil

674 familias quilombolas que viven en Moju sufren los impactos negativos del transporte de caolín (arcilla blanca) realizado por la Vale. Las comunidades reclaman la realización de un estudio de impacto ambiental, así como la construcción de servicios básicos para la población.

Desastre de Mariana por la ruptura de la Represa de la Samarco Mariana, Minas Gerais - Brasil

Uno de los mayores desastres ambientales del país, contaminó más de 300 km del Río Doce, destruyendo aldeas, provocando desplazamientos e impactando en la supervivencia y la economía de las poblaciones ribereñas. El Movimiento de Afectados por las Represas y la Articulación Internacional de Afectados por la Vale denunciaron la gravedad del caso, exigiendo responsabilidades de la empresa y compensaciones para los afectados.

Movimiento Capão Xavier Vivo contra la explotación de hierro Nova Lima, Minas Gerais - Brasil

La mina de explotación de hierro Capão Xavier presenta importante impacto ambiental: amenaza un área de preservación ambiental y una cuenca hidrográfica responsable por el abastecimiento de agua de 320 mil personas. El Movimiento Capão Xavier Vivo denuncia esta situación por medio de informes para la defensa del derecho al agua de los habitantes de la región.



* No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en cuenta el carácter histórico-estructural de algunos de ellos, que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero que tienen consecuencias hasta hoy.

CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE LUCHAN CONTRA EL EXTRACTIVISMO

“Al agua que Dios me ha dado / Yo la tengo que cuidar, / Si yo desperdicio el agua, / otros de sed morirán, / agua de lagos y ríos, / agua de cielo y mar, / eres regalo divino, / eres vida universal”.

Elva Del Carpio Merino. Miembro del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca.

¿Por qué la criminalización de los movimientos sociales?

Hoy, América Latina y Caribe es la región más peligrosa para posicionarse en contra del modelo de desarrollo extractivista y lidera el número de defensoras/es de la tierra y ambientalistas asesinadas/os. Las/os asesinadas/os son principalmente campesinas/os, indígenas, afrodescendientes y mujeres, con más probabilidades de represión en el caso de que se combinen estas condiciones. Las formas de criminalización incluyen el silenciamiento de las movilizaciones, protestas y denuncias contra los impactos del extractivismo, haciendo uso de diversos tipos de violencia, amenazas, detenciones arbitrarias, así como de complejos procesos legales que suponen altos costes para los actores sociales involucrados, llegando al asesinato de líderes de esos movimientos.

Pensar en criminalización de las protestas y del activismo social significa pensar en el papel del estado en el conflicto analizado y sus relaciones con las empresas privadas. La interacción entre los actores públicos y privados se verifica a partir del gran poder ejercido por los entes privados sobre el estado, que, para imponer los proyectos extractivistas u ocultar sus efectos nocivos, recurren a la corrupción y a acuerdos secretos. Así, como muestran los diez casos representados en el mapa, es cada vez más nítido el uso de la fuerza militarizada en el proceso de represión a movimientos sociales ambientalistas en la región, incluyendo el ejército y grupos armados al servicio de las multinacionales. A partir de estas premisas, veamos en mayor detalle la criminalización de los movimientos en el caso del megaproyecto Yanacocha.

La criminalización de los movimientos sociales en el marco del megaproyecto Yanacocha y Conga

Yanacocha es la mayor mina de oro de América Latina y la segunda mayor del mundo, y durante un buen tiempo también la más rentable. Perteneció mayoritariamente a la empresa estadounidense Newmont Mining, que comenzó sus operaciones en Cajamarca, en la década de 1990.

La proporción de este megaproyecto es tan grande que no se limita a una única localidad: el complejo minero se extiende por 250 kilómetros cuadrados y produce anualmente más de ochenta y cinco mil quilos de oro. La explotación de oro genera decisivos impactos en la vida de los habitantes locales: el principal es la contaminación del agua que provocó la reivindicación de la población de parar el proceso de extracción, así como de hacer una consulta popular

sobre la actividad de Newmont Mining y de permitir la participación de la población en el lucro por la extracción en sus tierras.

La actuación de Newmont Mining es expansiva. La empresa, con el apoyo del estado por medio de la expropiación, está comprando tierras de residentes a precios extremadamente bajos, impactando en la cultura y en el modo de subsistencia de las poblaciones locales, que se encuentran en situación de desamparo. En este proceso, Máxima Acuña, desde 2011 tuvo su vida transformada por el proyecto Conga, otro megaproyecto de la compañía. Agredida físicamente y procesada judicialmente, recientemente la suprema corte peruana reafirmó su derecho y el de su familia sobre sus tierras. En 2014 ocurrió un hecho representativo de la política peruana respecto a las demandas sociales. Seis personas fueron detenidas (Andrés Fernández Castrejón; Jeremías Rodríguez Vargas; Marcos Tocas Rodríguez; Norberto Medina; Waldir Medrano Toscano; Fredy García Becerra – este último fue candidato a la cámara municipal) a camino de una asamblea comunitaria sobre la contaminación del lago Conga. Organizaciones de derechos humanos se pronunciaron denunciando irregularidades en el proceso.

En 2012, José Antonio Sánchez Humán fue la quinta víctima fatal del conflicto, además del encarcelamiento del líder del movimiento “Tierra y Libertad”, Marco Arana. Según la ONG Grufides, la policía nacional de Perú tiene el derecho de trabajar para empresas privadas en sus horas libres como compensación por sus bajos salarios. En la región, muchos trabajan para Yanacocha. Las poblaciones locales de Cajamarca se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la violencia de las empresas y del estado por la disparidad de fuerzas, siendo víctimas de asesinatos, procesos judiciales, agresiones físicas y amenazas. Con todo, como en los casos representados en el mapa, para superar tales obstáculos, se recurre a nuevas formas de movilización que van más allá de las tradicionales protestas y paseatas en calles y en la puerta de los campos de minería. Es evidente también la búsqueda de movilización a través de redes de movimientos sociales y algunas ONG con el objetivo de recibir apoyo legal, así como de visibilizar la criminalización del conflicto y sus demandas.

MÁS INFORMACIÓN:

OCMAL – Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (<https://www.ocmal.org/>)

Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca (<http://fdacajamarca.blogspot.com.es/>)

Máxima Acuña (<https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo/el-caso-de-maxima-acuna/>)

Movimiento Tierra y Libertad (<https://tierraylibertad.lamula.pe/>)

ONG Grufides (<http://www.grufides.org/>)

Documental “Open Pit” sobre el proyecto de Yanacocha (<https://vimeo.com/50059350>)

Entrevista sobre las prisiones de 2012 (<https://youtu.be/Py8OL48VZyo>)

CRIMINALIZACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN LUCHA CONTRA LA MINERÍA

*Conflictos que provocaron la criminalización de las luchas y resistencias, por local **

Resistencia a la adquisición de tierras por la canadiense MagSilver Buenaventura, Chihuahua - México

La adquisición de tierras para extracción mineral por parte de la empresa MagSilver sin el consentimiento de la Asamblea de la comunidad -como obliga la ley-, generó un importante conflicto con los habitantes locales. En la escalada de violencia, dos activistas fueron asesinados defendiendo un río local de una explotación ilegal de la empresa El Cascabel, subsidiaria de MagSilver.

Cotui contra el megaproyecto de Pueblo Viejo/Barrick Gold/Goldcorp Cotui, Sánchez Ramírez - República Dominicana

El megaproyecto instalado por las empresas canadienses Barrick Gold y Goldcorp junto con la dominicana Pueblo Viejo Corporation, con inversión de cerca de 3,8 billones de dólares, causa intensas protestas en la región, con respuestas violentas por parte del gobierno, que han provocado diversos heridos y el encarcelamiento de líderes y manifestantes.

Indígenas Wayú del Sucuy contra la explotación de carbón Mara, Zulía - Venezuela

Los pueblos indígenas de la región luchan contra la creciente explotación mineral incentivada por el gobierno. Las disputas por el territorio aumentaron la militarización y la violencia contra los Wayú, con una fuerte criminalización de sus acciones. El Comité de Derechos Humanos de la Guajira denunció la represión, el encarcelamiento y el asesinato de decenas de líderes comunitarios.

Consulta Popular sobre Minería Piedras, Tolima - Colombia

Los habitantes de la ciudad realizaron una consulta popular sobre la aceptación o no de la minería con una victoria masiva del no, ratificada por el consejo de la ciudad, pero el Gobierno de Colombia alegó la ilegalidad del referéndum. Como resultado creció la militarización y la violencia contra los opositores del proyecto, incluyendo la muerte del activista César García.

Proyecto Fenix de explotación de níquel El Estor, Izabal - Guatemala

El conflicto ocurre en el contexto de la explotación de níquel y adquisición de tierras en la región y ha provocado una serie de procesos referentes a las empresas involucradas con la participación de diversas organizaciones internacionales. La violencia llevó al asesinato de Adolfo Ich en una disputa por la tierra por parte de guardias de seguridad del proyecto minero.

Tolupanes contra la minería de antimonio Norte de Honduras, El Yoro - Honduras

Los Tolupanes son un pueblo indígena con más de 5000 años de existencia que se opone a los proyectos extractivistas, reclamando su libre determinación y el derecho de ser consultados. Por su oposición y protestas contra los proyectos de minería y deforestación, han sido víctimas de fuerte represión, con el encarcelamiento y el asesinato de diversos líderes.

Ngöbe-Buglé contra la minería Provincia Ngöbe-Buglé - Panamá

Los Ngöbe-Buglé son la población indígena más numerosa de Panamá y han sufrido con las explotaciones de cobre y con la instalación de hidroeléctricas en su territorio. Al mismo tiempo, han sido víctimas de represión, incluyendo heridos y muertos durante las manifestaciones por la defensa de su territorio.

Protestas contra el proyecto Mirador de la empresa Ecuacorriente Zamora Chinchipe-Ecuador

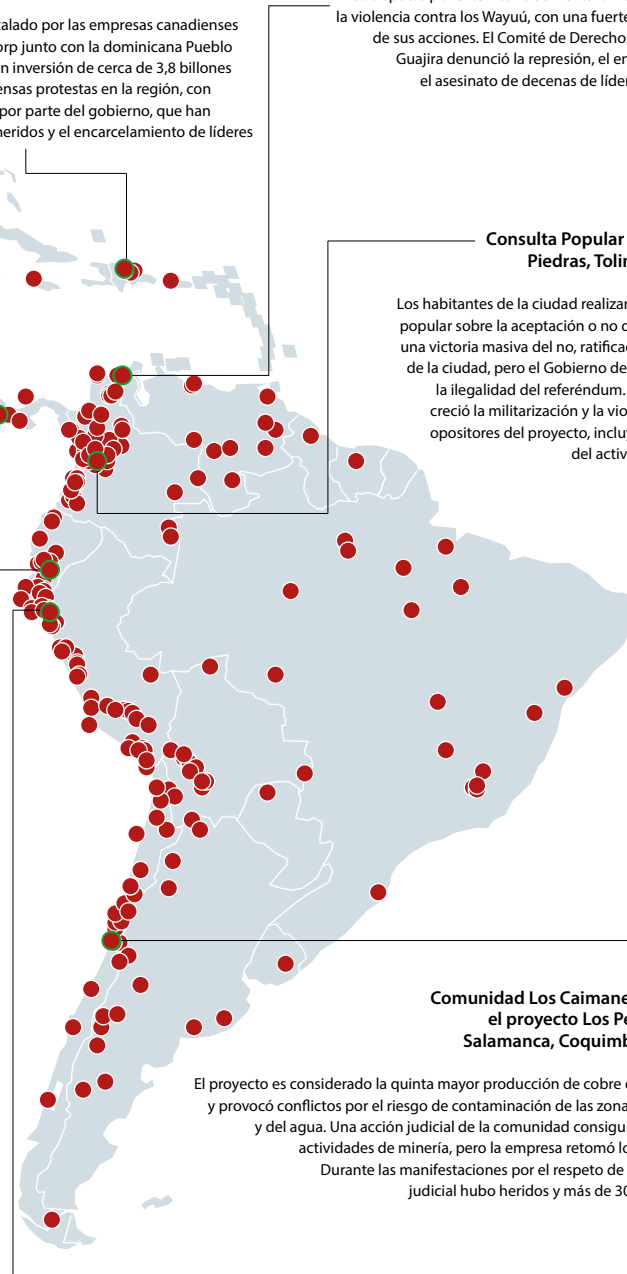
El proyecto está situado en la Amazonía ecuatoriana, local de alta diversidad biológica y territorio del pueblo indígena Shuar, que exige ser consultado sobre el megaproyecto. Cuando la empresa firmó el contrato con el gobierno, las protestas se intensificaron, movilizando diversas organizaciones sociales, pero fueron duramente reprimidas.

Comunidad Los Caimanes contra el proyecto Los Pelambres Salamanca, Coquimbo - Chile

El proyecto es considerado la quinta mayor producción de cobre del mundo y provocó conflictos por el riesgo de contaminación de las zonas agrícolas y del agua. Una acción judicial de la comunidad consiguió parar las actividades de minería, pero la empresa retomó los trabajos. Durante las manifestaciones por el respeto de la decisión judicial hubo heridos y más de 30 prisiones.

Represión de la oposición al proyecto de explotación de oro y cobre Cajamarca y Celendín - Perú

El proyecto de las empresas Yanacocha (Perú) y Newton Mining Corporation (EEUU) afecta indirectamente a 16 mil hectáreas. La comunidad local clama por una consulta popular sobre la implementación del proyecto, así como sobre la participación en el lucro de la explotación. Ha sufrido una fuerte represión policial con diversos prisioneros, heridos y muertos.



* No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en consideración el carácter histórico-estructural de algunos de ellos que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero con consecuencias hasta hoy.

MÁS ALLÁ DEL EXTRACTIVISMO: ACTIVISMO Y CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

“Nosotros somos agroecológicos” dicen varios líderes (...) es una manera de ver las cosas, un modo de entender, un modo de hacer, un modo de ser, un modo de convivir orgullosamente en el campo
Ribadeneira; Robalino, 2004.

¿Por qué la construcción de alternativas?

En América Latina y Caribe emergen con cada vez más fuerza la resistencia y las luchas de los pueblos afectados por el extractivismo. Estas luchas no constituyen apenas formas de oposición a los proyectos de crecimiento económico basados en la explotación de los recursos naturales, sino que cuestionan la génesis y las características del modelo de desarrollo actual y hegemónico, considerado occidental, de carácter extractivista, y defendido tanto por gobiernos conservadores como progresistas. Como resultado, estas resistencias defienden los derechos de la naturaleza, de la Pacha Mama, y la necesidad de construir alternativas – como el Sumak Kawsay o Buen vivir – que recuperen valores y saberes tradicionales y permitan la emergencia de formas de vida sostenibles que pongan en el centro de las discusiones a las personas, sus intereses y su bienestar.

Las alternativas construidas en Intag

Intag forma parte del municipio de Cotacachi y de la provincia de Imbabura, en la zona norte de la región andina ecuatoriana, en la cual conviven poblaciones indígenas – Kichwa Otavalo –, afrodescendientes y mestizas. En términos geográficos, la región forma parte de dos de las zonas biológicas más importantes del mundo: los Andes Tropicales y la Tumbes-Chocó-Magdalena. Paralelamente, Intag está en la frontera de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, el área protegida y zona de conservación más importante de los Andes occidentales de Ecuador.

Entre las riquezas de Intag, destaca la presencia de importantes reservas de cobre y molibdeno que han provocado el interés de explotación por parte de empresas locales e internacionales, y una larga historia de lucha y resistencia de los habitantes locales para declarar su territorio libre de minería. La explotación de cobre en Intag comienza en los años 1990, por parte de Bishimetals de la corporación Mitsubishi. El proyecto surgió sin informar a la población y sin licencias legales, pero tras la fuerte oposición comunitaria y de las organizaciones sociales y ambientales, como Defensa y Conservación Ecológica de Intag – que incluyó la ocupación y destrucción del campamento minero –, así como de un estudio sobre el impacto ambiental del proyecto, presentado en 1996, la explotación fue suspendida. Entre 2003 y 2004, las concesiones fueron cedidas por el gobierno ecuatoriano a la empresa minera canadiense Ascendant Cooper, también con diversas irregularidades, sin participación comunitaria y con fuerte represión de las organizaciones contrarias. Con todo, a partir de la presión social, el proyecto fue interrumpido en 2007. Al mismo tiempo, se desarrolla una fuerte conciencia ambiental en la región

y surgen emprendimientos cooperativos y alternativos a la minería, como la Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag, y diversos proyectos de apicultura, piscicultura, producción de biogás, artesanías y turismo comunitario. En 2000, el gobierno local aprueba también una ley municipal que declara a Cotacachi “Cantón Ecológico”, el primer municipio de América Latina de estas características, prohibiendo la minería y otras actividades no compatibles con la conservación de los recursos naturales.

Por otro lado, en 2008 Ecuador aprueba una nueva Constitución, la primera Carta Magna del mundo que reconoce los derechos de la naturaleza. El texto establece el objetivo de alcanzar el Buen vivir a través del respeto de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. En este contexto, en 2008, con significativo protagonismo de la sociedad civil, se creó un “Mandato Minero” que, como consecuencia del uso de la violencia sobre las comunidades y la compra fraudulenta de tierras en la región de Intag, retira las concesiones mineras a la empresa canadiense Ascendant Cooper. No obstante, en 2009, durante el gobierno del presidente Rafael Correa considerado progresista, es aprobada la Ley de Minería, que concede al Estado ecuatoriano la posibilidad de realizar nuevas concesiones en nombre del “interés nacional” y crea la Empresa Nacional Minera. En 2012, el Estado ecuatoriano concede las licencias para la explotación minera a la empresa estatal chilena CODELCO, por medio del proyecto estatal Llurimagua, y garantiza la ejecución del mismo, reprimiendo con violencia física y sanciones judiciales la oposición de las comunidades locales. Desde entonces, las/los habitantes de la región continúan luchando de forma pacífica para mantener su territorio libre de minería y generar nuevas alternativas. Apelan a la Constitución, que reconoce los derechos de la naturaleza y el derecho a la resistencia en el caso de violación de derechos constitucionales, así como la necesidad de consulta a las comunidades locales sobre proyectos que puedan afectar su ambiente y formas de vida.

MÁS INFORMACIÓN:

DECOIN – Defensa y Conservación Ecológica de Intag (<https://www.decoin.org/>)

AACRI – Asociación Agroartesanal de Caficultores Río Intag (<http://www.aa-cri.com/>)

Coordinadora Zonal de Intag (<http://coordinadorazonalintag.blogspot.-com.br/p/intag.html>)

Documental “Sitio y ocupación de Intag” (<https://www.youtube.com/watch?v=iceMcsakm6c>)

Proyecto fotográfico “La resistencia a la minería en el Ecuador” (<http://www.planv.com.ec/miradas/la-resistencia-la-mineria-el-ecuador>)

Constitución de Ecuador, 2008 (http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf)

Movimiento Regional por la Tierra – Estudio de caso Ecuador. Intag. Historia de una Luz (<http://porlatierra.org/docs/ff-f0858311230b7bb7ccc22e3ddaf659.pdf>)

RIBADENEIRA, J.; ROBALINO, L. (2004): Intag. Vivir en los Andes Occidentales de Cotacachi: agroecología y agricultura campesina. Proyecto FOES, Intag. Quito: Abya Yala.

MÁS ALLÁ DEL EXTRACTIVISMO: ACTIVISMO Y CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

*Conflictos que derivaron en propuestas alternativas, por local**

Protestas ambientalistas en 1970 contra ALCOA San Isidro del general, Pérez Zeledón - Costa Rica

La presión local e internacional logró el fin de los contratos con la empresa ALCOA y la prohibición de este tipo de contratos fue incluida en la Constitución, garantizando el derecho de los ciudadanos de desarrollar formas sostenibles de supervivencia. La lucha por la prohibición de la explotación minera representa uno de los momentos más importantes en la historia del movimiento ambientalista de Costa Rica.

Prácticas tradicionales de los Bribri contra la minería Limón, Talamanca - Costa Rica

Como resultado de la fuerte presión del pueblo Bribri y el apoyo de organizaciones locales e internacionales, la explotación en la región fue suspendida a favor del mantenimiento de formas de vida y prácticas tradicionales de este colectivo.

Cooperativas contra la minería en Intag Cotacachi, Imbabura - Ecuador

La fuerte presión local e internacional, con amplia participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, suspendió el proyecto de minería. Como alternativa, los habitantes de la zona crearon cooperativas agroartesanales, de turismo comunitario y pequeñas represas capaces de cubrir la demanda local. La lucha de las comunidades continúa, debido a las amenazas de retorno de la minería a la región.

Santuario Nacional de Tabaconas y cooperativas contra la minería Provincia San Ignacio, Cajamarca- Perú

La región es una zona con una significativa riqueza de fauna y flora. Mediante fuerte presión y lucha, con apoyo de los movimientos locales y religiosos de base, las comunidades consiguieron la suspensión de los proyectos mineros y crearon formas de subsistencia alternativas, como las cooperativas de café orgánico y la peregrinación religiosa al santuario de la región.

Agricultura familiar contra el proyecto de minería Achachucani Challapata, Oruro-Bolivia

Con la fuerte presión de las comunidades, especialmente de los grupos de mujeres, el proyecto fue suspendido a favor del mantenimiento de formas de vida comunitarias basadas en la agricultura familiar y en la creación de ganado.

Desarrollo local sostenible contra la mina de oro Meridian Esquel, Chubut-Argentina

La población local, con protagonismo de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados, luchó contra el proyecto de minería hasta la realización de un referéndum en 2003, en el que triunfó la oposición al proyecto, así como la creación de un plan de desarrollo local sustentable y la conservación de prácticas y formas de vida tradicionales de la región.

Movimientos de Ngöbe-Buglé contra la minería Provincia Ngöbe-Buglé - Panamá

Mediante la fuerte oposición a los proyectos de minería protagonizados por el movimiento indígena, y particularmente por las mujeres del movimiento, el proyecto fue suspendido y la población local obtuvo una legislación que reconoce la validez y la necesidad de protección de sus formas de vida y prácticas de subsistencia tradicionales.

Sostenibilidad contra la mina de hierro-níquel en Loma Miranda La Vega, Provincia de la Vega, República Dominicana

El proyecto de minería fue suspendido gracias a la fuerte reivindicación de las comunidades locales, apoyadas por actores nacionales e internacionales. Como alternativa se generó una nueva legislación favorable al medio ambiente y fue creada el área protegida de Loma Miranda que fomenta formas sostenibles de supervivencia para los habitantes locales, como el turismo.

Parque Nacional en la Cadena de montañas Gandarela contra la minería de hierro Raposo, Minas Gerais - Brasil

La oposición a la minería del proyecto de extracción de hierro ejecutado por la empresa Vale fue muy activa. Con el apoyo de diversos actores locales e internacionales, las comunidades y movimientos en lucha consiguieron crear el Parque Nacional Gandarela con formas de turismo comunitario.

Turismo alternativo en la Sierra de la Ventana Provincia de Buenos Aires - Argentina

La oposición y la lucha de los habitantes locales, con el apoyo de diversos movimientos nacionales, logró la suspensión de las concesiones y explotación de la zona. Como resultado, fue creada la Ley de Paisaje Protegido de Interés Provincial, permitiendo el surgimiento de proyectos de turismo alternativo y comunitario y otras actividades más sostenibles en la región.



* No especificamos una fecha exacta de los conflictos teniendo en consideración el carácter histórico-estructural de algunos de ellos que pueden existir desde hace décadas, adoptando diversas formas a lo largo del tiempo. El mapa incluye, por lo tanto, conflictos recientes y otros más antiguos, pero con consecuencias hasta hoy.

CONCLUSIONES

*Contra la muerte, nosotros demandamos vida.
Contra el silencio, exigimos la palabra y el respeto.
Contra el olvido, la memoria.
Contra la humillación y el desprecio, la dignidad.
Contra la opresión, la rebeldía.
Contra la esclavitud, la libertad.
Contra la imposición, la democracia.
Contra el crimen, la justicia.*

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, “Entre la luz y la sombra”, México, 2014.

Desde el GRISUL estamos analizando las formas y características del modelo de desarrollo extractivista, así como sus orígenes y difusión en los países de América Latina y Caribe. El extractivismo caracteriza históricamente a los territorios de la región y, a pesar de haberse independizado de los países colonizadores, o de proyectos como la estrategia de Industrialización por Sustitución de Importaciones para disminuir la dependencia económica y la implementación de diversos modelos económicos, el capitalismo extractivista es hoy el modelo de desarrollo hegemónico y está imponiéndose, en diversas modalidades, en todos los países de la región.

A comienzo del siglo XXI, la llegada al poder de gobiernos progresistas en diversos países alimentó la esperanza de los movimientos sociales y de sectores críticos con este modelo. La elección de candidatos opositores al neoliberalismo y acciones como la elaboración de nuevas Constituciones (en Bolivia y Ecuador) que reconocieron la plurinacionalidad, los derechos de la naturaleza y acogieron las propuestas del Buen vivir o Sumak Kawsay, parecían confirmar el optimismo inicial. Sin embargo, a pesar de los ingresos generados por el boom de las commodities a partir de 2003, que permitieron la creación de varios programas sociales, estos gobiernos se aliaron con el capital transnacional promoviendo proyectos desarrollistas y no implementaron reformas estructurales para la construcción de alternativas al extractivismo. Así, no solo no se colocó en discusión este modelo, sino que se favoreció y se contribuyó de forma explícita para su consolidación, bajo una forma renovada: el neo-extractivismo. Esta nueva modalidad defiende la expansión de la frontera extractiva como interés nacional, pero a diferencia del modelo clásico, comporta una mayor participación y control estatal, al tiempo que prevé políticas sociales y otros mecanismos compensadores para disminuir los efectos nocivos de los proyectos extractivistas. Como resultado, una vez más las economías latinoamericanas experimentaron procesos de reprimarización -con el aumento de las exportaciones de productos primarios-, y profundizaron su inserción global subordinada y su dependencia, esta vez no solo en relación a las economías centrales, sino también a China y otros países emergentes. Esta expansión del extractivismo está teniendo consecuencias irreversibles sobre los territorios y sus habitantes, que continúan protestando y resistiendo a este modelo de desarrollo en la región.

En este escenario, decidimos visibilizar, en primer lugar, los impactos que los proyectos extractivistas generan sobre la naturaleza y las personas. En segundo lugar, a partir del enfoque del Ecologismo de los Pobres y de la Justicia Ambiental, evidenciamos los conflictos provocados por el

extractivismo, así como las luchas y resistencias de los movimientos sociales y grupos afectados por los efectos de este modelo. Examinamos 259 conflictos provocados por el extractivismo que contraponen diversos actores. Por un lado, los estados y las empresas privadas, sobre todo multinacionales, que colaboran en asociaciones público-privadas o cooperan en la promoción de un modelo que los beneficia, criminalizando y reprimiendo a las poblaciones que rechazan los efectos del extractivismo y provocando, muchas veces, su expulsión de los territorios y su desplazamiento forzado. Por otro lado, las poblaciones afectadas que luchan contra los impactos negativos de corte económico, social, político y cultural de este fenómeno y resisten contra su avance, defendiendo sus elecciones y formas de vida. Consideramos la complejidad del fenómeno y la heterogeneidad de actores que lo caracterizan, evidenciando no solo el papel de las multinacionales de los países del Norte, sino también las del Sur, con especial destaque para la brasileña Vale, por la importancia que está adquiriendo en la región. Destacamos también que, en la violencia que sufren las poblaciones afectadas, participan cada vez más grupos paramilitares y redes del crimen organizado. La violencia, las amenazas, los procesos y los asesinatos cometidos por estos actores hacen de América Latina y Caribe el lugar más peligroso del mundo para ser activista medioambiental o defensor de la tierra.

Por las características históricas de América Latina y Caribe, los efectos del extractivismo asumen mayores proporciones cuando se trata de la vida de campesinos, mujeres, indígenas y afrodescendientes. Ellas/os son protagonistas en la oposición a la llegada y expansión de los proyectos extractivistas en sus territorios, pero con frecuencia sus acciones han sido ignoradas por el etnocentrismo, el colonialismo interno, el racismo y la cultura patriarcal que caracteriza a nuestras sociedades. Por ello, nuestro propósito fue mostrar que ellas/os no son actores pasivos, sino sujetos activos y en primera línea, con múltiples formas de lucha y resistencias, pero también con propuestas alternativas para la defensa de la Pacha.

Por todas las razones expuestas, en contraposición a la defensa del modelo extractivista como único camino para asegurar el bienestar de las poblaciones, visibilizamos las alternativas formuladas a partir de los saberes y cosmovisiones de los pueblos de la región. Estas propuestas, constantemente amenazadas por el avance del extractivismo, son proyectos colectivos en construcción, heterogéneos, inclusivos y ecológicos, que parten de las necesidades y deseos de las/os habitantes e incorporan aspectos no tradicionales para el desarrollo de matriz occidental, como la participación y la cooperación comunitaria, los derechos de la naturaleza y de la tierra, o consideraciones sobre la felicidad, como en el modelo de Buen vivir o Sumak Kawsay.

Con este trabajo deseamos contribuir a la comprensión de la región, destacando las disputas sobre los sentidos del desarrollo, los conflictos generados por el extractivismo, y las luchas y resistencias de las poblaciones latinoamericanas y caribeñas, al tiempo que buscamos generar análisis que nos permitan construir horizontes emancipadores para todas/os las/os habitantes de la región.

EN POCAS PALABRAS...

CAUSAS DE CONFLICTO

Entre las principales causas que provocan conflictos están: explotación y procesamiento de minerales, violaciones de derechos humanos, violación del derecho al agua, contaminación, cambio climático, expulsiones y desplazamientos forzados, deforestación, amenazas a la salud, violación de territorios indígenas, derechos y propiedad de la tierra, defensa de la biodiversidad y de la Pacha Mama, violencia y militarización de los territorios, etc.

RESULTADOS DE LOS CONFLICTOS

Pueden ser positivos o negativos para las luchas sociales:

Resultados positivos para las comunidades (consiguen parar los proyectos extractivistas) cuando se verifican algunas de las siguientes situaciones: decisiones judiciales apoyan a la justicia ambiental o aplican la regulación existente para proteger los territorios y sus poblaciones, realización de referendos que fuerzan la paralización de las actividades extractivistas, derecho a compensaciones, cambios institucionales y legislativos favorables, realización de estudios de impacto ambiental, activa participación ciudadana, creación de redes de solidaridad transnacional, creación de proyectos alternativos, fuerte movilización popular, etc.

Resultados negativos (las comunidades se ven desamparadas) cuando se registran: fuertes sociedades público-privadas, corrupción, criminalización, represión y violencia contra los activistas, decisiones judiciales apoyan las actividades extractivistas, concesiones y apoyo gubernamental para las actividades, desplazamientos forzados, asesinatos, graves consecuencias ambientales de los proyectos, etc.

ASESINATOS

En 2017, según Global Witness, América Latina fue la región con el mayor número de asesinatos de personas que defienden el medio ambiente: 116 de un total de 197 (o sea, casi 60% del total mundial), muchas de las cuales estaban luchando contra el extractivismo.

Brasil continúa siendo el país más peligroso, con 46 asesinatos, seguido de Colombia (32), México (15), Perú (8) y Nicaragua, Honduras, Guatemala, Argentina, República Dominicana y Venezuela. Casi 40% de las víctimas eran indígenas. Berta Cáceres e Isidro Baldenegro López, activistas que ganaron el Premio Goldman de medio ambiente, son dos referencias de las luchas de la región que fueron asesinadas.

La inmensa mayoría de los asesinatos continúa impune... Los principales responsables por los asesinatos son latifundistas, directores y funcionarios de empresas de minería, mineros ilegales, agentes de seguridad privada, fuerzas de seguridad estatales, paramilitares, etc.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS

Además del asesinato, otras técnicas son utilizadas para criminalizar y silenciar a los defensores de la Pacha Mama: amenazas de muerte, asedio, intimidaciones, prisiones, detenciones arbitrarias, violencia, agresiones sexuales, secuestros, palizas, desplazamientos forzados, campañas difamatorias, procesos judiciales, etc.

IMPACTOS AMBIENTALES

Algunos de los impactos ambientales provocados por las actividades extractivistas son: contaminación y reducción de la calidad del agua, contaminación del aire, desertificación, generación de basura contaminada, pérdida de biodiversidad (vida salvaje, agrobiodiversidad), inseguridad alimentaria (por los daños a la agricultura familiar y local), calentamiento global, degradación paisajística, contaminación del suelo, erosión del suelo, deforestación y pérdida de cobertura vegetal, daño a los sistemas hidráulicos y geológicos, conectividad ecológica, etc.

ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS CONFLICTOS

Los principales actores involucrados en los conflictos, con diversas posiciones y alianzas, son:

Privados: empresas mineras, mineros ilegales, agentes de seguridad privada, paramilitares, redes de narcotráfico, crimen organizado, etc.

Públicos: gobiernos nacionales, congreso, Ministerios y secretarías (medio ambiente, industria, minería, trabajo, agua, etc.), tribunales, fuerzas de seguridad del Estado, autoridades locales, defensoría, etc.

Sociales: campesinos, artesanos, pastorales, movimientos sociales, sindicatos, grupos de mujeres, religiosos, comunidades indígenas, afrodescendientes, centros de investigación, consejos locales, defensores de derechos humanos, organizaciones ambientalistas, ONG, tribunales populares, redes de afectados/as, etc.

Organismos internacionales: Banco Mundial, Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de las Naciones Unidas (ACNUR, OIT, FAO, ONU Mujeres, etc.), tribunales internacionales, etc.

FORMAS DE MOVILIZACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES

Los actores sociales utilizan varias estrategias de movilización: protestas callejeras, manifestaciones, bloqueos, campañas de boicot, activismo mediático, reclamaciones y peticiones, campañas públicas, huelgas, ocupaciones, peticiones de estudios de impacto ambiental, alianzas internacionales, creación de redes transnacionales de afectados/os, denuncias y acciones judiciales, exigencia de consultas previas, realización de informes, actividades artísticas y creativas (teatro, murales, documentales, etc.), realización de investigaciones comunitarias participativas (investigación militante), referendos, etc.

CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS

Las luchas sociales no solo resisten a los proyectos extractivistas, también proponen actividades alternativas para la economía local, como son: generación de nueva legislación ambiental (defensa de la biodiversidad, protección de territorios, creación de reservas y parques naturales, etc.), elaboración de políticas públicas participativas, prohibición de las actividades de minería, apoyo a actividades productivas y de subsistencia sostenibles (agricultura y pesca familiar, turismo comunitario, artesanía, etc.), creación de cooperativas, respeto a las culturas y formas de vida tradicionales, protección de territorios indígenas y de comunidades afrodescendientes, mejoras en las condiciones laborales, etc.

DEDICATORIA

A los que luchan por la defensa de nuestra Pacha Mama

A las y los líderes reprimidas/os y asesinadas/os por luchar por la tierra y los recursos naturales

“Las luchas se desprecian e invisibilizan porque para los que tienen poder político y económico son un mal ejemplo. Inspiran la lucha emancipatoria de los pueblos y demuestran que sí son posibles otras formas de vida que protegen el planeta. Esto es contrario al proyecto de dominación hegemónica que se impone en todo el mundo y que pretende saquear los recursos estratégicos de los pueblos”

Berta Cáceres.

Líder del pueblo indígena Lenca y activista medioambiental hondureña asesinada en 2016 por luchar, durante más de 20 años, por los derechos de su pueblo y de las mujeres, y por defender la justicia ambiental y alternativas al modelo de desarrollo vigente.
<http://bertacaceres.org>

CONTENIDO

1. Introducción: Desarrollo y movimientos sociales en América Latina y Caribe	2
2. Medio ambiente: Impactos del extractivismo sobre el medio ambiente	4
3. Migraciones: Extractivismo y desplazamientos forzados	6
4. Mujeres: Luchas y resistencias de las mujeres	8
5. Pueblos indígenas: Luchas y resistencias de los pueblos indígenas	10
6. Afrodescendientes: Luchas y resistencias de los afrodescendientes	12
7. Empresas: Extractivismo y empresas multinacionales: el caso de la Vale	14
8. Criminalización: Criminalización de los movimientos sociales que luchan contra el extractivismo	16
9. Alternativas: Más allá del extractivismo: activismo y construcción de alternativas	18
10. Conclusiones	20
11. Índice y referencias	22

REFERENCIAS

Portal web consultado:

EJATLAS Environmental Justice Atlas (2016) Portal que reúne conflictos ambientales de diversa tipología. Forma parte del proyecto *Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade* (EJOLT), bajo la dirección de Joan Martínez Alier y Leah Temper y la coordinación de Daniela del Bene de la Universidad Autónoma de Barcelona y el Institute of Environmental Science and Technology (ICTA). <http://ejatlas.org/>

Bibliografía de referencia:

- ACOSTA, A. (2016): *O Bom Viver. Uma oportunidade para imaginar outros mundos*. São Paulo: Editora Autonomia Literária -Elefante.
- BAMBIRRA, V. (2013): *O capitalismo dependente latino-americano*. Florianópolis: Insular.
- BRINGEL, B. y ECHART MUÑOZ, E. (2017): “Imaginar sobre el desarrollo en América Latina: entre la emancipación y la adaptación al capitalismo”, *Revista Española de Desarrollo y Cooperación*, v. 39, p. 9-24.
- BRINGEL, B. y ECHART MUÑOZ, E. (2015): “Movimientos sociales, desarrollo y emancipación”, en Sotillo, José Ángel (Dir.): *Antología del Desarrollo*, Madrid: IUDC/La Catarata, p.573-670.
- DAZA, M.; HOETMER, R. y VARGAS, V. (2012): *Crisis y movimientos sociales en Nuestra América: cuerpos, territorios e imaginarios en disputa*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global, p. 397-408.
- DILGER, G.; LANG, M.; PEREIRA, J. (Org.) (2017): *Descolonizar o imaginário. Debates sobre pós-extrativismo e alternativas ao desenvolvimento*. São Paulo: Elefante Editora.
- DOS SANTOS, T. (1998): *A Teoria da Dependência. Balanço e Perspectivas*, Niterói: Editora Insular.
- ECHART MUÑOZ, E. (2017): “Movimientos de mujeres y desarrollo”, In: *Género y desarrollo: cuestiones clave desde una perspectiva feminista*. Madrid: IUDC-Los Libros de La Catarata, p. 131-159.
- ECHART MUÑOZ, E. (2017): Uma visão crítica da Cooperação Sul-Sul: práticas, atores e narrativas. *CADERNOS DO CEAS*, v. 241, p. 392-417, 2017.
- ESCOBAR, A. (1996): *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Bogotá: Norma.
- GONZÁLEZ CASANOVA, P. (1963): “Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo”, *América Latina: Revista del Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales*, VI (3), Río de Janeiro.
- GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO SOBRE ALTERNATIVAS AL DESARROLLO (2011): *Más allá del desarrollo*. Quito: Ediciones AbyaYala / Fundación Rosa Luxemburg.
- MARTÍNEZ ALIER, J. (2007): *O Ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração*. São Paulo: Contexto.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2008): “De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência latino-americana”, em: CECENA, Ana Esther (coord.). *De los saberes de la emancipación y de la dominación*. Buenos Aires: CLACSO.
- OXFAM (2016): *Tierra, Poder y Desigualdad em América Latina*. OXFAM Internacional.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2004): *O desafio ambiental*. Rio de Janeiro: Record.
- QUIJANO, A. (2000): “El fantasma del desarrollo en América Latina”. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, Vol. 6 Nº 2 (mayo-agosto), pp. 73-90.
- RIVERA CUSICANQUI, S. (2010): *Ch'ixinakax utxiwa. Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- STAVENHAGEN, R. (1981 [1965]): “Siete tesis equivocadas sobre América Latina”. *Sociología y Subdesarrollo*, México, Nuestro Tiempo, pp. 15-84
- SVAMPA, M. (2008): *Cambio de época: movimientos sociales y poder político*. Buenos Aires: CLACSO / Siglo XXI.
- VILLARREAL, VILLAMAR, M. (2017): “Replanteando el debate sobre migraciones y desarrollo. Nuevas direcciones y evidencias”. *Revista Interdisciplinaria da Mobilidade Humana (REMHU)*, v. 25, n.51, p. 181-198
- WALLERSTEIN, I. (2006): *Análisis de sistemas-mundo. Una introducción*. Madrid : Siglo XXI Editores

¿Qué es el extractivismo? ¿Por qué América Latina y Caribe es la región más peligrosa del mundo para las/os defensoras/es de la tierra, líderes y activistas medioambientales? ¿Cuáles son los impactos del extractivismo sobre comunidades de afectados, mujeres, indígenas y afrodescendientes? ¿Cómo se posicionan éstas/os ante este proceso y cuáles son sus luchas y reivindicaciones? ¿Qué papel desempeñan en el extractivismo los Estados, las empresas multinacionales y otros actores? ¿Existen alternativas al extractivismo? Estas son algunas de las preguntas que "Pacha: defendiendo la tierra. Extractivismo, conflictos y alternativas en América Latina y Caribe" intenta responder. Visibilizando el protagonismo de las comunidades afectadas por el extractivismo, queremos también mostrar la multiplicación de alternativas al desarrollo que generan diversas estrategias por la defensa de la tierra y las formas de vida tradicionales, así como la creación de nuevos paradigmas como el Buen vivir, derivados de los saberes y perspectivas de los pueblos de la región.



Imagem: Matheus Ribeiro

Elaboración de contenidos:

Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global (GRISUL/UNIRIO), Escuela de Ciencia Política, Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro.

Coordenadoras:

Enara Echart Muñoz y María del Carmen Villarreal Villamar

Investigadoras/es:

Bruna Soares de Aguiar, Leilane Nascimento dos Reis Santos, Liara Farias Bampirra, Juliana Pinto Lemos da Silva, Henrique Fonseca Correia, Patrícia Porto de Barros, Paula Duarte, Roger Lucas Correa Martins, Seimour Pereira de Souza Filho, Natália Pasetti, Gabriella Teixeira da Fonseca y Larissa Thomaz Coelho.

Elaboración de mapas:

Atelier de Cartografía del LABMUNDO: Niury Novacek Gonçalves de Faria y Nadhine Hentzy Stellet da Silva

Coordinación del Atelier de Cartografía del LABMUNDO y diagramación:

Rubens de Siqueira Duarte (becario postdoctoral INCT-PPED)

Traducción:

María del Carmen Villarreal Villamar

ISBN: 978-85-92920-06-7

Edición: Périplos, Rio de Janeiro, 2018

Más informaciones:

GRISUL: <http://www.grisulunirio.com/>

Escuela de Ciencia Política de la UNIRIO:

<http://www.unirio.br/ccjp/cienciapolitica>

Licencia Creative Commons: 

Con patrocinio de:

**FAPERJ**
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro